

Así es la política que propone el Gobierno para informales

Reactivación Económica 

Flexibilizar el acceso a sitios públicos, educación, y un plan para la seguridad social, algunos de los ejes del documento.

En Twitter: @CamilaGolarte

COMO lo demostraron las cifras de informalidad, publicadas por el Dane esta semana, la proporción de este grupo de personas mostró una disminución en junio, pero expertos prevén que el número se disparará apenas se eliminen más restricciones para la movilidad por la emergencia sanitaria por la covid-19. Paralelo a ese panorama, el Gobierno publicó para comentarios una política pública de vendedores informales, con la que busca tratar este fenómeno.

Y es que, según el Dane, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de esa población era de 47,3% en junio de 2019 y este año fue de 46,2%, una reducción de 1,1 puntos porcentuales (pps). Por otro lado, y según el documento de política pública, la incidencia de la informalidad llegó a 60,6% en el territorio colombiano en 2019.

Entre esa población, detalla el documento, están los vendedores, quienes se ven obligados a ofrecer productos de manera informal en el espacio público.



Según el Dane, en las 23 ciudades principales, la informalidad llegó a 46,2% en junio. CEET

Como lo anunció en días pasados en una entrevista a este diario Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, con la política buscan enfocarse especialmente en estas personas.

“La política tendrá como objetivo contribuir en la dis-

minución de los niveles de pobreza y desigualdad, relacionados con el fenómeno de la informalidad. Serán propósitos de la política mejorar las condiciones para la inclusión en condiciones dignas de la población trabajadora informal, con es-

pecial énfasis en el aprovechamiento del espacio público”, manifestó en su momento el jefe de la cartera de trabajo.

Como se detalla en el borrador de política pública, el Gobierno buscará trabajar en tres ejes clave: redu-

cir informalidad de vendedores ambulantes; disminuir los conflictos que se derivan de la convivencia y el uso de espacio público y aumentar el impacto de los programas dirigidos a esta población.

Para el primero de esos puntos proponen que se desarrollen instrumentos legales para flexibilizar el aseguramiento en el sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, además de la creación de unos incentivos a los empresarios para que contraten a trabajadores informales vulnerables. Asimismo, plantean que se genere una regulación que permita el uso o el aprovechamiento del espacio público por parte de vendedores informales.

Para financiar esa política pública, se propone que se obtengan recursos a través del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, de regalías, recursos propios de entidades territoriales y de cooperación internacional.

LO URGENTE

Si bien esta política pública todavía debe pasar por

varios trámites antes de ser aprobada y publicada, la pregunta es qué va a pasar mientras algunas de estas propuestas se aplican, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en estas poblaciones vulnerables.

Para Stefano Farné, director del observatorio laboral de la Universidad Externado de Colombia, uno de los focos en este tipo de políticas es ver salidas para aumentar la productividad. “Una forma de hacerlo es a través de una mayor educación y aumentando el capital humano de la economía en general”.

Otro punto urgente a tratar que destaca Farné es la urgencia que hay con respecto a la participación de los informales en los sistemas de seguridad social, pues alrededor del 90% no cotiza y, además, tienen unos ingresos inferiores al 75% del salario mínimo. “Es urgente hacer algo al respecto, porque también se verá un aumento por cuenta de la pandemia”.



La política tendrá como objetivo contribuir en la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad, relacionados con la informalidad”.

La Corte confirma el fallo contra el traslado pensional

Bogotá

LA CORTE Constitucional declaró inexecutable el decreto 802 que eliminó la obligatoriedad del traslado de 20.000 pensiones de retiro programado de un salario mínimo de los fondos privados hacia Colpensiones.

El alto tribunal ya había tumbado a finales de julio el decreto 558 que ordenaba que las mesadas de retiro

programado se trasladaran de manera obligatoria.

Por ese decreto 558, que la Corte tumbó, los fondos privados debían transferir a Colpensiones unos \$5 billones para que la entidad pública administrara estos dineros y asumiera las mesadas de esos pensionados.

Esos usuarios eran un 20 por ciento de los que tenían pensiones de retiro programado en estos fondos.

Luego vino el decreto



En dos fallos, la Corte tumbó decretos del Gobierno. CEET

802, que modificó el anterior y estableció que los traslados de mesadas de retiro programado no podían ser obligatorios, sino voluntarios.

Este último fue el que el

alto tribunal revisó ayer y lo declaró inconstitucional de forma unánime, es decir, con nueve votos.

Solo hubo unas aclaraciones de voto conjuntas entre los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares.

La razón de tumbar el decreto es que como ya se había caído el 558, la consecuencia lógica era que el 802, que se derivó del que fue declarado inexecutable, también debía caer.

El Gobierno había argumentado estos traslados afirmando que se debía proteger a los pensionados ante el golpe que sufrieron los portafolios de los fondos privados por la crisis económica generada por el coronavirus.

Avalan seis rutas desde Rionegro

Economía y Negocios

EL MINISTERIO de Transporte informó que el Gobierno Nacional -a través del Ministerio del Interior-, autorizó el inicio del plan piloto de reactivación aérea desde el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

Según el Ministerio de Transporte, tras el análisis epidemiológico y las recomendaciones del comité asesor y del Ministerio de Salud y Protección Social, este emitió recomenda-

ción favorable para iniciar las operaciones entre el José María Córdova y seis destinos.

Los aeropuertos son: Palonegro, del municipio de Lebrija (Santander, que sirve a Bucaramanga); Camilo Daza, de Cúcuta (Norte de Santander); Matecaña, de Pereira (Risaralda); La Nubia, de Manizales (Caldas); El Edén, de Armenia (Quindío), y el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, en el archipiélago de San Andrés.